**TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SONORA.**

**PLENO JURISDICCIONAL.**

Logotipo

Descripción generada automáticamente**JUICIO DEL SERVICIO CIVIL.**

**EXP. 2042/2019**

**ACTORA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.**

**AUTORIDADES DEMANDADAS:**

**SERVICIOS EDUCATIVOS DE ESTADO DE SONORA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.**

**MAGISTRADO: DR. DANIEL RODARTE RAMÍREZ.**

**SECRETARIA PROYECTISTA: MTRA. MARÍA ELENA SÁNCHEZ ROSAS.**

**RESOLUCIÓN CUMPLIMENTADORA| Hermosillo, Sonora, a doce de junio de dos mil veinticuatro.**

**V I S T O S** para cumplimentar la ejecutoria pronunciada el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en el juicio de amparo directo laboral número 514/2023, derivada de los autos del expediente número **2090/2019**, relativo al Juicio del Servicio Civil, promovido por **- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -**, en contra de los **SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA DE SONORA Y/O DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER FEDERAL DENOMINADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA Y/O DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA RELACIÓN LABORAL,** reclamando el reconocimiento de su antigüedad de veintiocho años al servicio de la demandada, así como el pago por concepto de prima de antigüedad, las constancias que integran el expediente en que se actúa, todo lo que fue necesario ver, y:

**R E S U L T A N D O:**

**1.-** El treinta de mayo de dos mil diecinueve, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, demando a los Servicios Educativos del Estado de Sonora y/o del Organismo Descentralizado de Carácter Federal denominado Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora y/o de quien resulte Responsable de la relación laboral, las prestaciones que se precisan a continuación:

**“*P R E S T A C I O N E S.***

***a).*** *El reconocimiento de mi antigüedad de TREINTA Y DOS (32) años al servicio de la demandada.*

***b).*** *El pago de la cantidad de* ***$67860.48 (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 48/100M.N.),*** *por concepto de la Prima de Antigüedad respectiva a mis TREINTA Y DOS (32) años de servicios que presté a las demandadas, de conformidad con lo establecido en las fracciones l, II, III y VI del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.*

*Fundan la presente demanda laboral, los siguientes:*

***H E C H O S****.*

***PRIMERO.*** *Con fecha - - - - - - - - - - - - inicié a prestar mis servicios personales y subordinados para las demandadas con la categoría de planta, realizando funciones de* ***DOCENTE*** *y como última clave presupuestal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .*

***SEGUNDO.*** *Mi última adscripción lo fue como MAESTRO DE GRUPO DE PRIMARIA FORANEO de la Ciudad de Obregón, Son, lugar en el cual laboré hasta el día - - - - - - - - - - - - , fecha en la cual renuncié de manera voluntaria, a fin de acceder a mi jubilación, sin embargo y no obstante de haber requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, éste se ha negado a realizarlo, razón por la cual acudo ante esta autoridad laboral, en tiempo y forma legales.”.*

**2**.- Mediante auto de fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, al advertirse que la demanda contenía irregularidades, se previno a la actora para que, dentro de cinco días hábiles, aclarara corrigiera o completara y para que acompañara las pruebas de que dispusiera y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funda su demanda o indique el lugar donde puedan obtenerse si no pudiera aportarlas voluntariamente.

**3**.- Con fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el Licenciado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , en su carácter de apoderado de la parte actora, aclaro y amplio la demanda adicionando y describiendo los medios probatorios.

“*Atendiendo al acuerdo dictado por este tribunal con fecha quince de noviembre de dos mil diecinueve, mismo que fuera notificado con fecha dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, vengo en tiempo y forma y de manera cautelar en virtud de no aceptar la competencia de este Tribunal, a desahogar la prevención establecida, la cual se hace de la siguiente manera:*

***Primero:*** *Respecto a los hechos de modo tiempo y lugar, continuando con el numeral de los hechos se manifiesta.*

*3.- En el tenor de lo expuesto en los hechos que anteceden, desde la fecha en que causo baja mi representado por jubilación y conforme a la antigüedad que cumplió trabajando para la demandada, como se acredita con las documentales exhibidas en el escrito inicial de demanda, le solicitó a los Servicios de Educación del Estado de Sonora le hiciera el pago de la prima de antigüedad a la que tiene derecho de conformidad con el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, sin embargo, desde esa fecha y a pesar de solicitarlo en reiteradas ocasiones la demandada se ha negado a realizar dicho pago, motivo por el cual se vio en la necesidad de demandarlo en la presente vía.*

***Segundo****: Respecto de las pruebas ratifica todas y cada una de las ofrecidas en el escrito inicial de demanda ya que con las mismas se acredita el derecho subjetivo y la procedencia de la prestación reclamada.”.*

**4**.- Con fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por admitido el escrito de demanda en la vía y forma propuesta, ordenándose emplazar a los demandados.

**5.-** El día veinte de mayo de dos mil veintidós, la Licenciada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, promoviendo en representación de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, en su carácter de apoderada legal, expuso toralmente lo siguiente:

“*Mediante este escrito, a nombre y representación de los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA vengo dando contestación a la demanda formulada por la C. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, lo cual realizo de conformidad con el artículo 115 de la Ley del Servició Civil para el Estado de Sonora, en los términos siguientes:*

***En cuanto al capítulo de prestaciones del escrito de demanda:***

*a).- Se niega acción y derecho a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - para reclamar el reconocimiento de antigüedad de treinta y dos (32) años, ya que la misma resulta improcedente. De la propia hoja única de servicios que la actora exhibe como prueba se advierte que se le reconoce como fecha de ingreso el - - - - - - - - - - - - y como fecha de baja por jubilación la de - - - - - - - - - - - - , por lo que carece de derecho para reclamar una antigüedad que desde el 03 de noviembre de 2011 ya le era reconocida en su hoja única de servicios y también desde que renunció para jubilarse.*

*b).- Se niega acción y derecho a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - para reclamar de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA el pago de la cantidad de $67,860.48 por concepto de prima de antigüedad, pues el artículo 162 de la Ley Federal le resulta inaplicable y por ende no le corresponde dicha prestación, ya que en el caso concreto la citada prestación no es aplicable a los trabajadores del Servicio Civil del Estado de Sonora, y la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora no prevé esta prestación, sin que sea el caso de que se surta el supuesto de aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues no se actualiza ninguno de los supuestos de la Ley para considerar la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo. Además debe considerarse que la actora fue docente federalizado de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la hoja de servicios que ofrece como prueba, ello en términos del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica publicado en el diario oficial de la federación el 19 de mayo de 1992; del decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica publicado en el diario oficial de la federación el 19 de mayo de 1992; del convenio que de conformidad con el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica celebraron, por una parte, el ejecutivo federal y, por la otra, el ejecutivo del estado libre y soberano de Sonora, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 1992; aspecto que se advierte también de la propia hoja única de servicios en lo relativo período de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), al que pertenecen los maestros federalizados como es el caso de la actora, y derivado de ello es que se reitera que el artículo 162 de la Ley Federal le resulta inaplicable y por ende no le corresponde dicha prestación de ahí que carezca de derecho la actora para reclamar la prima de antigüedad con fundamento en lo establecido en las fracciones I, II, III, y IV del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.*

***En cuanto al capítulo de hechos se contesta:***

*PRIMERO.- El hecho identificado como primero del escrito de demanda es cierto en parte y falso en parte. Es cierto que la actora con fecha - - - - - - - - - - - - inició a prestar sus servicios personales y subordinados con la categoría de planta realizando funciones de DOCENTE y como última clave presupuestal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. Es falso que inició a prestar sus servicios personales y subordinados para “las demandadas’’ ya que los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA fue creada en mayo de 1992 según se desprende del decreto de su creación publicado en el Boletín Oficial No. 40 Secc. I de fecha 18 de mayo de 1992, en tanto que como lo señala la actora lo fue el - - - - - - - - - - - - . La actora fue docente federalizado de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la hoja de servicios que ofrece como prueba, ello en términos del acuerdo nacional para la modernización de la educación básica publicado en el diario oficial de la federación el 19 de mayo de 1992; del decreto para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica publicado en el diario oficial de la federación el 19 de mayo de 1992; del convenio que de conformidad con el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica celebraron, por una parte, el ejecutivo federal y, por la otra, el ejecutivo del estado libre y soberano de Sonora, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 1992; aspecto que se advierte también de la propia hoja única de servicios en lo relativo período de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), al que pertenecen los maestros federalizados como es el caso de la actora. De lo expuesto se advierte que no le resulta responsabilidad alguna en este juicio a mi representada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA pues en términos de lo que se expone los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA es quien asumió el control de los trabajadores docentes federalizados en los términos del acuerdo y convenio que se citan.*

*Por otra parte, se destaca el hecho que de conformidad con la propia hoja única de servicios que la actora exhibe como prueba se advierte que se le reconoce y se le reconocía como fecha de ingreso - - - - - - - - - - - - y como fecha de baja por jubilación la de - - - - - - - - - - - - , por lo que carece de derecho para reclamar una antigüedad que desde el 03 de noviembre de 2011 y desde la fecha en que renunció para jubilarse, ya le era reconocida. Se opone la excepción de PRESCRIPCIÓN en contra de lo reclamado por - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, en el capítulo de prestaciones incisos a) y b) consistentes en reconocimiento de antigüedad y pago de prima de antigüedad, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora que dispone que las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, por lo que sin que esto implique reconocimiento alguno a la procedencia de las acciones reclamadas, la actora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reclama el reconocimiento de antigüedad y pago de prima de antigüedad, por lo que en términos del artículo 101 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, a partir del día siguiente al - - - - - - - - - - - - en que renunció de manera voluntaria a fin de acceder a su jubilación, esto es, a partir del 1 de enero de 2012 contaba con el término de un año para reclamar el reconocimiento de antigüedad y el pago de la prima de antigüedad, término que le feneció el día 1 de enero de 2013, y si presenta su demanda hasta el 30 de mayo de 2019 es evidente que a esa fecha su acción se encontraba prescrita, pues trascurrió el exceso el año que tenía para ejercitar sus acciones pues tenía hasta el 1 de enero de 2013 inclusive para ello, y como consecuencia se encuentra prescrita la acción para demandar las prestaciones que reclama consistentes en reconocimiento de antigüedad y prima legal de antigüedad.*

*SEGUNDO.- El hecho identificado como segundo del escrito de demanda es cierto en parte y falso en parte. Es cierto la última adscripción y lugar; es cierto que renunció de manera voluntaria el día - - - - - - - - - - - - a fin de acceder a su jubilación; es falso que la actora hubiera requerido “en reiteradas ocasiones” a mis representados los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA el pago de la prestación que demanda, y por ello resulta falso que exista la negativa a que alude la actora en el hecho que se contesta. Se niega acción y derecho a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - para reclamar de los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA el pago de la prima de antigüedad, el artículo 162 de la Ley Federal le resulta inaplicable y por ende no le corresponde dicha prestación de ahí que carezca de derecho la actora para reclamar la prima de antigüedad con fundamento en lo establecido en las fracciones I, II, III, y IV del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.*

*Sirven de apoyo a lo anterior las tesis jurisprudenciales 2a./J. 21/2012 (10a.) y 2a./J, 214/2009, de rubros: "****ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES. SI SUS TRABAJADORES LABORARON BAJO EL RÉGIMEN DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, NO TIENEN DERECHO A LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." y "TRABAJADORES JUBILADOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES. TIENEN DERECHO A RECIBIR, POR SU ANTIGÜEDAD, LOS QUINQUENIOS, PENSIONES Y DEMÁS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS BUROCRÁTICAS DE CARÁCTER LOCAL, PERO NO LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."****, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo I, marzo de 2012, página 498 y Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 318, con números de registro digital: 2000408 y 165370, respectivamente.*

*En cuanto al escrito presentado en fecha 17 de junio de 2021 en el que se desahoga la prevención formulada a la actora se contesta:*

*En cuanto al hecho que identifica como 3.- en el escrito de aclaraciones a la demanda es falso. Es falso que la actora hubiera requerido o solicitado a mis representados los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA el pago de la prestación que demanda, y por ello resulta falso que exista la negativa a que alude la actora en el hecho que se contesta, ni desde la fecha que señala, ni en ninguna otra. Se niega acción y derecho a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - para reclamar de los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA el pago de la prima de antigüedad, pues el artículo 162 de la Ley Federal le resulta inaplicable y por ende no le corresponde dicha prestación.*

***DEFENSAS Y EXCEPCIONES:***

*1.- FALTA DE ACCION Y DE DERECHO, que se opone en virtud de que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, no reúnen los elementos constitutivos de su acción, lo cual es un requisito indispensable para la procedencia de la misma y al no colocarse en las hipótesis establecidas en la normatividad contractual aplicable, este H. Tribunal deberá de absolver a mis representados los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA de todas y cada una de las prestaciones que reclama la hoy actora en el capítulo de prestaciones y hechos de su demanda.*

*2.- OBSCURIDAD E IMPRECISION EN LA DEMANDA, que se opone ya que parte la actora omite señalar de manera precisa los elementos de las prestaciones que reclama en su demanda en su demanda, omitiendo señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación a los reclamos que formula, con lo que deja a mis representados los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA en imposibilidad para excepcionarse y defenderse conforme a derecho y a este H. Tribunal lo imposibilita para dictar un laudo congruente a verdad sabida y buena fe guardada, de conformidad a lo establecido en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la materia, por todo ello es menester que este H. Tribunal absuelva a los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO de todas y cada una de las pretensiones reclamadas por la hoy actora.*

*3.- PRESCRIPCIÓN.- Se opone esta excepción en contra de lo reclamado por - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, como es el pago de las prestaciones que reclama en el escrito de demanda consistentes en prima de antigüedad, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del servicio civil para el Estado de Sonora que dispone que las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, por lo que sin que esto implique reconocimiento alguno a la procedencia de las acciones reclamadas, SE OPONE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN en relación a todas aquellas prestaciones que se reclamen con anterioridad a un año de la presentación de la demanda que lo fue el 30 de mayo de 2019, según el sello fechador del H. Tribunal que recibió la demanda primigeniamente, por lo que se encuentran prescritas todas aquellas prestaciones que se reclamen con anterioridad al 30 de mayo de 2018.*

*4.- PRESCRIPCIÓN.- Se opone esta excepción en contra de lo reclamado por - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, en el capítulo de prestaciones incisos a) y b) consistentes en reconocimiento de antigüedad y pago de prima de antigüedad, con fundamento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del servicio civil que dispone que las acciones que nazcan de esta Ley, del nombramiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, por lo que sin que esto implique reconocimiento alguno a la procedencia de las acciones reclamadas, la actora - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reclama el reconocimiento de antigüedad y pago de prima de antigüedad, por lo que en términos del artículo 101 de la Ley del Servicio Civil, a partir del día siguiente al - - - - - - - - - - - - en que renunció de manera voluntaria a fin de acceder a su jubilación, esto es, a partir del 1 de enero de 2012 contaba con el término de un año para reclamar el reconocimiento de antigüedad y el pago de la prima de antigüedad, término que le feneció el día 1 de enero de 2013, y si presenta su demanda hasta el 30 de mayo de 2019 es evidente que a esa fecha su acción se encontraba prescrita, pues trascurrió el exceso el año que tenía para ejercitar sus acciones pues tenía hasta el 1 de enero de 2013 inclusive para ello, y como consecuencia prescrita la acción para demandar las prestaciones que reclama consistentes en reconocimiento de antigüedad y prima legal de antigüedad.*

*Sirven de apoyo a lo anterior las tesis de rubro:*

*Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2020765. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Laboral. Tesis: PC.I.L. J/54 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2357. Tipo: Jurisprudencia*

***SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DERECHO A SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN Y EL ENTERO RETROACTIVO DE LAS APORTACIONES OMITIDAS ANTE EL INSTITUTO RELATIVO ES IMPRESCRIPTIBLE MIENTRAS SUBSISTA LA RELACIÓN DE TRABAJO, PERO SI SE RECLAMA COMO CONSECUENCIA DE LA ACCIÓN PARA IMPUGNAR EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL, PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO. – (LO TRANSCRIBE). -***

*Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.*

*Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2020714. Instancia: Plenos de Circuito. Décima Época. Materias(s): Laboral. Tesis: PC.I.L. J/53 L (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, página 2355. Tipo: Jurisprudencia*

*ANTIGÜEDAD DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA ACCIÓN PARAJMPUGNAR SU RECONOCIMIENTO PUEDE PRESCRIBIR EN EL PLAZO DE UN AÑO. – (LO TRANSCRIBE). –*

*Esta tesis se publicó el viernes 04 de octubre de 2019 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de octubre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”.*

**6.**- En la **audiencia de pruebas y alegatos** celebrada el día nueve de noviembre de dos mil veintidós, se admitieron como pruebas de la **actora**, las siguientes:

**1.- DOCUMENTAL,** consistente en hoja de servicio de tres de noviembre de dos mil once, expedida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, la cual obra agregada a fojas número 7 del sumario.

**2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.**

**3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.**

Como pruebas de la parte **demandada**, se admitieron las siguientes:

**1.- CONFESIONAL EXPRESA.**

**2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.**

**2.- DOCUMENTALES,** consistentes en:

**a.-** Copia certificada de la hoja de servicios federal, hora única de servicios, formato único de personal y solicitud de renuncia por jubilación de la actora.

**b.-** Acuerdo Nacional para modernización de la educación básica publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos; decreto de la celebración de convenios en el marco del Acuerdo Nacional para la modernización para la educación básica Publicado en el diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 1992; convenio que de conformidad con el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica que celebraron por una parte el ejecutivo federal y por otra parte el ejecutivo estatal libre y soberano de Sonora, con la comparecencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el diario oficial el 25 de mayo de 1992, decreto que crea los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, publicado en el Boletín Oficial número 40 sección I de 18 de mayo de 1992 y reglamento interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial tomo CCVI Edición Especial de 30 de diciembre de 2020.

**7.-** Seguido el juicio por todos sus estadios procesales y una vez que quedaron desahogadas las pruebas admitidas a las partes, por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se citó el asunto para oír resolución definitiva.

**8.-** El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dictó resolución definitiva.

**9.**- En contra de dicha resolución la apoderada legal de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y de la Secretaría de Educación y Cultura interpuso demanda de amparo, la cual se tramitó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito bajo el número 514/2023-

El tres de junio de dos mil veinticuatro, se recibió el oficio número 290/I mediante el cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, remite el testimonio de la ejecutoria de amparo cuyos puntos resolutivos dicen:

*“****PRIMERO****. La Justicia de la Unión* ***AMPARA Y PROTEGE a los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA*** *y a la* ***SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA,*** *contra el acto de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 2090/2019.*

SEGUNDO: El amparo se concede para el efecto de que la autoridad responsable:

“***a) Declare insubsistente el laudo reclamado.***

***b) Dicte otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de concesión.***

***c) Y al decidir sobre la pretensión de reconocimiento de antigüedad, de acuerdo con lo aquí considerado (es decir, mediante la precisión de la litis y las pruebas desahogadas en autos) declare infundada tal pretensión y absuelva a las enjuiciadas a lo que este tópico se refiere.”.***

**C O N S I D E R A N D O:**

**I.- CUMPLIMIENTO**: Este Tribunal acata la ejecutoria de amparo pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito en el juicio de amparo directo laboral número 514/2023.

En observancia de la ejecutoria de mérito, **se deja insubsistente la resolución emitida con fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.**

Hecho lo anterior, se pasan a precisar los efectos de la concesión del amparo para su debido cumplimiento en esta resolución:

***a) Declare insubsistente el laudo reclamado.***

***b) Dicte otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de concesión.***

***c) Y al decidir sobre la pretensión de reconocimiento de antigüedad, de acuerdo con lo aquí considerado (es decir, mediante la precisión de la litis y las pruebas desahogadas en autos) declare infundada tal pretensión y absuelva a las enjuiciadas a lo que este tópico se refiere.”.***

**II.- COMPETENCIA:** Este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver el asunto, con fundamento en los artículos 112, fracción I y 6º. Transitorio de la Ley del Servicio Civil, y Noveno Transitorio del Decreto 130 de Reformas a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Estado, de 11 de mayo de 2017.

**III.-** **OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA:** El plazo de presentación de la demanda resultó oportuna, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, que establece que, las acciones que nazcan de la ley, del nombramiento y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescriben en un año, con las excepciones contenidas en el artículo 102, del mismo ordenamiento. Al efecto, los demandantes reclaman en el pago de diversas prestaciones las cuales serán analizadas al entrar al fondo de cada una de ellas, toda vez que la patronal demandada opuso excepción de prescripción respecto de algunas de las acciones ejercitadas, por lo tanto, para no prejuzgar en este apartado, se analizarán cada una de las prestaciones reclamadas a la luz de las excepciones de prescripción opuestas al llevar a cabo el análisis individual de cada una de las prestaciones que se reclaman en el presente juicio.

**IV.-** **VÍA:** Resulta ser correcta y procedente la elegida por la actora del presente juicio en los términos de los artículos 113, 114 y demás aplicables de la Ley del Servicio Civil; así como el sexto transitorio de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora que faculta a esta Sala Superior para el trámite de este juicio en la vía elegida por la actora.

**V.- PERSONALIDAD:** Al presente juicio la actora comparece por su propio derecho, como persona física, mayor de edad, en pleno goce de sus facultades mentales, reclamando las prestaciones a las que se contrae su escrito de demanda. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, comparecen por conducto de la Licenciada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, apoderada legal de los Servicios Educativos del Estado de Sonora y la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, según lo acredita con copia certificada de la - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , pasada por la fe de la Notario Público número 106, Licenciada - - - - - - - - - - - - - - - - - -.

Además de lo anterior, en el presente procedimiento no se advierte que haya sido objetada por alguno de los contendientes la personalidad con que comparecieron al presente juicio; y no se demostró en el presente sumario lo contrario; atento a lo anterior, se justifica que quedó debidamente acreditada la personalidad de cada uno de los contendientes en la presente controversia con los documentos que se acompañaron a los escritos inicial de demanda y de contestación con los que justifican la personería con la que comparecen.

**VI.- LEGITIMACIÓN:** La legitimación de las partes en el proceso, en el caso de la parte actora, se acreditaron con las facultades y derechos que al efecto prevé la ley del Servicio Civil del Estado de Sonora en los numerales 2°, 3°, 4°, 5° y 6°; Los Servicios Educativos del Estado de Sonora y Secretaría de Educación y Cultura del Estado, se legitima en términos de los artículos 2° y 3° del ordenamiento jurídico apenas aludido, por tratarse de las entidades públicas en que prestan sus servicios los trabajadores del servicio civil.

**VII.-** **VERIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO:** Por ser de orden público se estudia el correcto emplazamiento. En el presente caso los demandados fueron emplazados por la actuaria adscrita a este Tribunal cubriéndose las exigencias que la ley prevé, lo cual se corrobora con los escritos de contestación de la demanda, estableciéndose la relación jurídica procesal.

**VIII.-** **OPORTUNIDADES PROBATORIAS:** Todas las partes contendientes en el presente juicio gozaron de dicha prerrogativa en igualdad de circunstancias y oportunidades, pues abierta la dilación probatoria que al efecto se concedió, los contendientes ofrecieron los medios de convicción que estimaron convenientes para acreditar sus respectivas pretensiones de hecho y de derecho, así como las defensas y excepciones que estimaron aplicables al caso. En la especie, no se opusieron ni se advierten actualizadas las excepciones de litispendencia, caducidad de la acción, o la cosa juzgada; por lo que satisfechos todos y cada uno de los presupuestos procesales exigidos por la Ley, resulta en que el presente juicio tenga existencia jurídica y validez formal.

**IX.- ESTUDIO:** EN CUMPLIMIENTO A EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO LABORAL 514/2023, que emite el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, se procede a resolver en los siguientes términos:

Analizados que fueron todos y cada uno de los presupuestos procesales en los considerandos que anteceden y al resultar en la existencia jurídica y validez formal del juicio se procede a entrar al estudio del fondo del asunto.

La actora reclama el reconocimiento de que cuenta con una antigüedad de TREINTA Y DOS (32) años de servicios y el pago por la cantidad de **$67,860.48** (Son: Sesenta y siete mil ochocientos sesenta Pesos 48/100 Moneda Nacional), por concepto de la prima de antigüedad prevista y regulada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia.

Señala como hechos que el **UNO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE**, comenzó a laborar para los demandados, realizando funciones de docente; que su última adscripción como maestro de grupo de primaria fue en Ciudad Obregón, Sonora, donde laboró hasta el **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE**, fecha en la que renunció de manera voluntaria a fin de acceder a su jubilación; sin embargo y no obstante de haber requerido en reiteradas ocasiones a la patronal el pago de la prestación demandada, éste se ha negado a realizarlo.

Los demandados en la contestación manifestaron que el punto primero de hechos es cierto, respecto a que la actora con fecha **PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE**, inició a laborar realizando funciones de maestra; que el segundo hecho de la demanda es cierto, respecto a que la actora renunció de manera voluntaria el día **TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE**, a fin de acceder a su jubilación.

Confesionales expresas y espontáneas a las cuales se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 794 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia del Servicio Civil, por disposición del artículo 10 de dicho ordenamiento jurídico.

De las referidas confesionales, se desprende que la actora laboró para los demandados, TREINTA Y DOS (32) años, lo cual se corrobora con la “hoja única de servicios” exhibida por la actora, visible a foja siete del sumario de la que se advierte como fecha de ingreso el 01/09/1979 y como fecha de baja 31/12/2011, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 123 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, 795 y 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la materia del Servicio Civil.

En consecuencia, este Tribunal hace suyos los razonamientos de la ejecutoria de amparo que se cumple en el sentido de que se arriba a la conclusión de que si la parte actora solicitó el reconocimiento de la antigüedad genérica por un lapso preciso y las enjuiciadas demuestran que ya la habían reconocido la pretensión relativa (ambos con la hoja única de servicios), la misma no puede prosperar puesto que no es dable jurídicamente acogerla, ya que el reconocimiento de la antigüedad ya había sido acreditado, en igualdad o en superioridad a la reclamada, por lo tanto, se constata la satisfacción de ese derecho, supuestamente desconocido; de ahí que resulte improcedente la pretensión de reconocimiento de antigüedad reclamada por la parte actora y se absuelve a los Servicios Educativos del Estado de Sonora y a la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, de su reclamo y proceda absolver a las autoridades educativas del reconocimiento de la antigüedad solicitado por la demandante.

Respecto a la prestación consistente en prima de antigüedad demandada por la actora, esta Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje la decreta improcedente.

Lo anterior es así, porque en el presente juicio no resulta aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, ya que dicha prestación no fue prevista ni por la Ley Federal Burocrática que inicialmente rigió la relación de trabajo, ni por la Ley del Servicio Civil del Estado de Sonora, ordenamientos jurídicos que resultan aplicables a la relación laboral que sostenían como trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (federal) y posteriormente con los Servicios Educativos del Estado de Sonora, con motivo del Acuerdo de Modernización de la Educación Básica, celebrado por el Gobierno Federal y las Entidades Federativas. Lo anterior, conduce a concluir con meridiana claridad que a los trabajadores al servicio del Estado (local o federal), no les corresponde la prima de antigüedad, toda vez que ninguna de las leyes burocráticas aludidas, contempla dicha figura, por lo que no existe fundamento legal alguno, en que pueda apoyarse el hecho de que deba aplicarse en forma supletoria el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se está ante un caso de omisión o laguna, pues la prestación analizada no fue abordada por ninguna de las legislaciones citadas, puesto que conforme al artículo 10 de la Ley del Servicio Civil, en la interpretación de dicha ley se tomarán en consideración los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución General de la República y de la Ley Federal del Trabajo, que para ese efecto será aplicable supletoriamente, así como la jurisprudencia, la costumbre, el uso y la equidad.

El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su apartado A, el régimen jurídico a que están sujetas las relaciones laborales de los patrones con los obreros, jornaleros, domésticos entre otros; en concordancia con dicho apartado, la Ley Federal del Trabajo prevé entre otros beneficios para los trabajadores, con cargo al patrón la PRIMA DE ANTIGÜEDAD (artículo 162). Por otro lado, el apartado B del precepto constitucional indicado, instituye los principios fundamentales que rigen las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal (ciudad de México), por una parte, y sus servidores por la otra; este apartado y las leyes que lo reglamentan, aunque no establecen la prima de antigüedad, sí instauran otros beneficios para los servidores públicos con motivo de su antigüedad, con cargo principalmente al presupuesto de egresos correspondiente.

Los dos sectores laborales mencionados y regulados por el artículo 123 constitucional, están claramente catalogados en cuanto a su régimen, lo que no sucede con los trabajadores al servicio de los organismos descentralizados de orden federal o estatal, respecto de los cuales no existe un sistema ordenado, pues en unos casos se gobiernan por el referido apartado A y otros por el B; tal incertidumbre sin embargo, no debe llevar a aceptar que un trabajador de un organismo descentralizado, como lo es los Servicios Educativos del Estado de Sonora, tiene derecho a los beneficios por antigüedad que se establecen en ambos apartados, porque tal extremo, no lo establece ninguna norma constitucional ni legal, porque no puede producirse el efecto de modificar las relaciones jurídicas entre dicho organismo y sus trabajadores durante el tiempo que estuvo vigente la relación de trabajo, que siempre se rigió por el apartado B, lo que se obtiene de la confesión expresa y espontánea realizada por la actora del presente juicio, pues manifiesta que relación de trabajo fue el Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, Servicios Educativos del Estado de Sonora, por lo que no debe perderse de vista que sus sueldos y demás erogaciones siempre fueron con cargo al presupuesto de egresos correspondiente y que la relación de trabajo durante su vigencia, se rigió por el apartado B del artículo 123 constitucional. La confesión expresa y espontánea en este apartado destacada, gozan de eficacia plena probatoria de conformidad con el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, para establecer, que la relación de trabajo que sostuvo el accionante con Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, se rigió por el apartado B, del artículo 123 constitucional, puesto que recibió los quinquenios correspondientes a sus años de servicios, además, todos y cada uno de ellos fueron pensionados por jubilación por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que resulta de observancia y aplicación para las Dependencias, Entidades, Trabajadores al servicio civil y Pensionados, entre otros, para los servidores públicos de la administración pública federal; dependencias, entidades y organismos enumerados en las fracciones que integran el artículo 1° de dicho ordenamiento jurídico.

Lo anteriormente precisado, encuentra sustento en lo establecido en el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual se abandona el criterio sostenido con antelación a la emisión del que se transcribe:

Época: Décima Época

Registro: 2012980

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II

Materia(s): Constitucional, Laboral

Tesis: 2a. /J. 130/2016 (10a.)

Página: 1006

**“ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a. /J. 180/2012 (10a.) (\*)].**

La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial.”.

Amparo directo en revisión 6490/2015. Ovidio Rodríguez García. 4 de mayo de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro.

Amparo directo en revisión 671/2016. José Espinosa Medina. 13 de julio de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo en revisión 1366/2016. Susana Leticia Fuentes Sosa. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.

Amparo directo en revisión 1913/2016. Manuel Arturo Acevedo Godoy. 24 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Francisco Manuel Rubín de Celis Garza.

Amparo directo en revisión 1356/2016. Ligia Mirbella Arceo y Avilés. 21 de septiembre de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Ron Snipeliski Nischli.

Tesis de jurisprudencia 130/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de octubre de dos mil dieciséis.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nota: (\*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 734, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."

Esta tesis se publicó el viernes 11 de noviembre de 2016 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de noviembre de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Se sigue entonces, que en el ámbito jurídico de los organismos públicos descentralizados de carácter estatal, aunque hayan sido creados por los gobiernos de las entidades federativas, con motivo de la descentralización de los Servicios de Educación Básica, lo que aconteció en cumplimiento al Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, signado por el Ejecutivo Federal y los Gobernadores de las entidades federativas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de mayo de 1992, se obtiene pues que sí originalmente la relación de trabajo se regía por la Ley Federal Burocrática y con motivo del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación, de cuyo contenido también se obtiene que aplica la Ley del Servicio Civil, pues también resulta que la relación de trabajo se rige conforme a las reglas del apartado B del artículo 123 constitucional, pues conforme al artículo 116 fracción VI, de la Constitución General de la República, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores y por ello la prestación principal reclamada consistente en prima de antigüedad prevista y regulada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, resulta improcedente, pues no se encuentra prevista en ninguno de los ordenamientos jurídicos burocráticos ya aludidos, sin que pueda reclamarse en forma supletoria, puesto que la supletoriedad no tiene el alcance de introducir figuras jurídicas no previstas en el ordenamiento jurídico a suplir conforme al criterio de jurisprudencia que se reproduce a continuación:

Época: Décima Época

Registro: 2003161

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2

Materia(s): Constitucional

Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.)

Página: 1065

**“SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.**

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.”.

Contradicción de tesis 389/2009. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo en la misma materia del Séptimo Circuito. 20 de enero de 2010. Mayoría de cuatro votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Contradicción de tesis 406/2010. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 13 de abril de 2011. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

Amparo en revisión 712/2011. Consultores en Servicios Jurídicos Fiscales, S.A. de C.V. 30 de noviembre de 2011. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Jonathan Bass Herrera.

Contradicción de tesis 437/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de noviembre de 2012. Cinco votos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo.

Amparo directo 40/2012. Ejido Nueva Libertad, Municipio La Concordia, Chiapas. 21 de noviembre de 2012. Unanimidad de cuatro votos; votaron con salvedades José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 34/2013 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de febrero de dos mil trece.

Conforme al criterio transcrito, la aplicación supletoria de la ley, en el caso de la Ley Federal del Trabajo procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y es necesario que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente; la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; esa omisión o vació legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar controversias o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y por último, que las normas aplicable supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

En el presente juicio; la prestación que analiza resulta improcedente, porque no fue intención del legislador incluir como prestación la prima de antigüedad prevista y regulada en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual se contempla para los trabajadores que se rigen por el apartado A del artículo 123 constitucional. Esto es así, porque a los trabajadores del servicio civil, el legislador previó como prestación por concepto de antigüedad el quinquenio, y aun cuando son prestaciones de distinta naturaleza, pues mientras una se actualiza cuando la relación de trabajo termina; mientras la otra se da, cada que se cumplen cinco años de servicio, por lo que sería jurídicamente injusto incluir a los trabajadores burocráticos una prestación que el constituyente y legislador ordinario reservó para los trabajadores cuya relación, se rige por el apartado A del artículo 123 constitucional. Para mayor ilustración, se transcribe el criterio de jurisprudencia del tenor siguiente:

Época: Novena Época

Registro: 192586

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XI, Enero de 2000

Materia(s): Laboral

Tesis: I.6o.T. J/25

Página: 945

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. QUINQUENIO Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD. NATURALEZA.**

Las prestaciones relativas a quinquenio y prima de antigüedad, son de naturaleza diversa, toda vez que son prestaciones que se encuentran reguladas por legislaciones diferentes, pues el artículo 34 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, fracción II, establece: "Por cada cinco años de servicios efectivos prestados hasta llegar a veinticinco, los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento del salario. En los presupuestos de egresos correspondientes, se fijará oportunamente el monto o proporción de dicha prima.". Y el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios; ...". De lo cual se aprecia que aun cuando estas prestaciones se basan en la antigüedad de los trabajadores, son de naturaleza diferente, ya que el quinquenio es un complemento del salario y la prima de antigüedad no; el monto del quinquenio se establece en el presupuesto de egresos y el monto de la prima de antigüedad, está señalado en la Ley Federal del Trabajo en forma mínima y puede ser aumentado convencionalmente por las partes; el monto del quinquenio no puede rebasar lo autorizado en el presupuesto de egresos y la prima de antigüedad puede rebasar los límites legales; y, por último, el quinquenio se paga durante el transcurso de la relación laboral y la prima de antigüedad se paga al término de la relación laboral.”

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 9456/96. Servicio Postal Mexicano. 26 de septiembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: María Teresa Negrete Pantoja.

Amparo directo 7846/97. Yolanda Ramírez Figueroa. 19 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretario: José Luis Martínez Luis.

Amparo directo 7006/98. Servicio Postal Mexicano. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 746/99. Servicio Postal Mexicano. 19 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Amparo directo 9996/99. Natalia Gaona García y otros. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Lourdes Patricia Muñoz Illescas.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de 1997, página 830, tesis I.1o.T.83 L, de rubro: "TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y PRIMA QUINQUENAL. DIFERENCIAS.".

Así pues, conforme a lo evidenciado, aun cuando las prestaciones sean de naturaleza diferente, no debe de perderse de vista que son prestaciones que el legislador ordinario estableció en las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la prima de antigüedad en la Ley Federal del Trabajo, y el Quinquenio en las Leyes Burocráticas reglamentarias del apartado B del artículo constitucional aludido, o bien en las condiciones generales de trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, como ocurre en la especie, previsto y regulado en el artículo 96 de dicha normativa. Lo anterior, se robustece con el contenido del criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2011015

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III

Materia(s): Laboral

Tesis: III.1o.T. J/1 (10a.)

Página: 2011

**“TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.**

Es correcta la absolución decretada en cuanto a la prima de antigüedad, en virtud de que esa prestación no está prevista en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.”.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 34/87. María Prieto Cárdenas. 23 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

Amparo directo 304/2006. Jerónimo López Gómez. 22 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 559/2006. Gabriel Alfaro Arana. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 1552/2011. Aracely Pintor Quiroz. 2 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Amparo directo 851/2014. 22 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Como se evidenció de lo hasta aquí precisado, la reclamación consistente en prima de antigüedad ejercitada por la actora en este juicio, como ya se determinó deviene improcedente, lo que se robustece también con el criterio jurisprudencial siguiente:

Época: Décima Época

Registro: 2014530

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV

Materia(s): Laboral

Tesis: I.6o.T. J/42 (10a.)

Página: 2652

**“PRIMA DE ANTIGÜEDAD. AL NO ESTAR CONTEMPLADA EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DICHO BENEFICIO NO LE CORRESPONDE A ESTE TIPO DE TRABAJADORES, SIN QUE PROCEDA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL NO ESTAR FRENTE A UN CASO DE OMISIÓN O LAGUNA.**

A los trabajadores al servicio del Estado no les corresponde la prima de antigüedad, toda vez que la ley burocrática no contempla dicha figura; en consecuencia, no existe fundamento legal en que pueda apoyarse el hecho que deba aplicarse en su favor el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, dado que no se está frente a un caso de omisión o laguna, único en que el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado autoriza la supletoriedad de la codificación laboral común.”.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1038/2011. Rosa María Guerrero Zárate. 10 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 243/2012. María de la Luz Figueroa Cedillo. 24 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Sandra Iliana Reyes Carmona.

Amparo directo 33/2013. Bertha Martínez Soto. 20 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete García.

Amparo directo 958/2016. Rosa Imelda Orozco Díaz de León. 8 de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Virginia Fabiola Rosales Gómez.

Amparo directo 187/2017. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Herlinda Flores Irene. Secretaria: Norma Nelia Figueroa Salmorán.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de junio de 2017 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 19 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Además de lo anterior, así se obtiene del decreto de creación de Los Servicios Educativos del Estado de Sonora, que en sus artículos 1° y 14 establece, que se constituye un organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio jurídicos propios; y que las relaciones laborales y de seguridad social se aplicará la Ley del Servicio Civil, que resulta ser la reglamentaria del apartado B, del artículo 123 Constitucional. Para mayor ilustración, se transcriben los artículos aquí aludidos.

*“ARTÍCULO 1.- Se crean los Servicios Educativos del Estado de Sonora, como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.*

*“ARTÍCULO 14.- En materia de relaciones laborales y de seguridad social, los Servicios Educativos del Estado de Sonora, aplicarán la Ley del Servicio Civil para el Estado y lo que establecen los Convenios celebrados entre Gobierno del Estado, Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 18 de mayo de 1992”.*

Por lo todo lo vertido con anterioridad, se reitera pues la improcedencia del pago de la Prima de Antigüedad demandada por la actora de este juicio, pues como se evidenció, la relación de trabajo se rigió por el apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

**R E S O L U T I V O S:**

**PRIMERO:** Se **CUMPLIMENTA** la ejecutoria de amparo directo laboral emitida con fecha diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, dentro del juicio de **amparo directo laboral número** **514/2023.-**

**SEGUNDO: Se deja sin efectos la resolución de fecha diecisiete de febrero de dos mil veintitrés.**

**TERCERO:** Este Tribunal es competente para conocer y decidir sobre los juicios del Servicio Civil, en funciones de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, siendo la vía elegida por la actora correcta para su trámite.

**CUARTO:** Han sido improcedentes las acciones intentadas por - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, en contra de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA.-

**QUINTO:** Se absuelve a los SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÒN Y CULTURA DEL ESTADO DE SONORA, de reconocer que la actora tiene una antigüedad de TREINTA Y DOS (32) años a su servicio; por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

**SEXTO:** Se absuelve a los demandados en este juicio al pago de la prima de antigüedad, por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución.

**SÉPTIMO:** **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE** la presente para todos los efectos legales, de conformidad con el artículo 125 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y en su oportunidad, archívese este asunto como total y definitivamente concluido.

**A S Í** lo resolvieron y firmaron por unanimidad de votos de los Magistrados de Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, José Santiago Encinas Velarde, (Presidente), Renato Alberto Girón Loya, Daniel Rodarte Ramírez, Blanca Sobeida Viera Barajas y Guadalupe María Mendívil Corral, siendo ponente el tercero en orden de los nombrados, quienes firman con el Secretario General de Acuerdos, Luis Arsenio Duarte Salido, que autoriza y da fe.- DOY FE.-

MTRO. JOSÉ SANTIAGO ENCINAS VELARDE.

MAGISTRADO PRESIDENTE.

MTRO. RENATO ALBERTO GIRÓN LOYA.

MAGISTRADO SEGUNDO INSTRUCTOR.

DR. DANIEL RODARTE RAMÍREZ.

MAGISTRADO TERCERO INSTRUCTOR.

MTRA. BLANCA SOBEIDA VIERA BARAJAS

MAGISTRADA CUARTA INSTRUCTORA.

LIC. GUADALUPE MARÍA MENDÍVIL CORRAL.

MAGISTRADA QUINTA INSTRUCTORA.

MTRO. LUIS ARSENIO DUARTE SALIDO.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS.

En trece de junio de dos mil veinticuatro, se publicó en Lista de Acuerdos y Proyectos, la resolución que antecede.- CONSTE.-

MESR.